

Ávila/Monserrate

COMPROMISO DEMOCRÁTICO

BOGOTÁ, Septiembre 2026

N° 152

grupoavilamonserrate@gmail.com

Equipo de redacción: **Ávila Monserrate** / Editores: **Tulio Hernández, Alfonso Molina, Marianella Montenegro** / Diseño gráfico: **Shymny Azuaje**



¿UNA NUEVA ERA DE RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA?

Tulio Hernández

Entre la cautela esperanzada y la expansión entusiasta

LA APUESTA EMPRESARIAL DE COLOMBIA EN VENEZUELA

Jeanfreddy Gutiérrez Torres

Crisis de infraestructura en Venezuela

¿CÓMO PUEDE FUNCIONAR UN PAÍS?

Alfonso Molina

REPARTO DEL BOTÍN PETROLERO VENEZOLANO

Eddie A. Ramírez S.

Lo que no se reconstruye con cemento

VENEZUELA, COLOMBIA Y LAS CAPACIDADES CULTURALES QUE APARECEN EN MEDIO DE UNA TRAGEDIA

Yesenia Camacho

Con enfoque de DD.HH.

ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES NATURALES

Juan Navarrete Monasterio

NOVELAS DE LA MIGRACIÓN: IDENTIDAD, VERGÜENZA Y MEMORIA

Luz Marina Rivas

Una tradición compartida

DÍA MUNDIAL DE LA AREPA 2026

Marianella Montenegro

AGENDA

Integración colombo-venezolana

ENCUENTRO EMPRESARIAL BINACIONAL EN CÚCUTA

En North Miami Beach

CARTOGRAFÍAS DE PERTENENCIA, MIGRACIÓN Y VISIBILIDAD

Tulio Hernández

En las tres últimas décadas, las correspondientes a la hegemonía absoluta del llamado “socialismo del siglo XXI”, las relaciones diplomáticas de Venezuela con el resto de países latinoamericanos han sido una montaña rusa llena de sobresaltos, rupturas e, incluso, amenazas de confrontaciones bélicas.

La relación con Colombia no es la excepción. Ha sido una carrera de obstáculos. Con el gobierno de Pastrana se vivió, entre 2001 y 2002, una breve luna de miel. Pero con el arribo de Uribe, entre 2002 y 2010, entramos en una saga de conflictos e intercambios de agresiones verbales: Chávez acusa a Colombia de ser una base militar de Estados Unidos; Uribe a Venezuela por la presencia de las FARC en su territorio. De lo verbal se pasó a una ruptura que hizo sonar tambores de guerra. El comercio entre ambos países pasó de 7.200 millones de dólares en 2008 a 1.400 en 2010.

Cuando entra en escena Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, regresa una época de buenas relaciones que se ve alterada por la muerte de Chávez, el inicio del gobierno de Maduro, el desate de la crisis migratoria y el primer cierre unilateral de la frontera venezolana. La relación entre ambos al final termina tensa, pero se mantienen los vínculos diplomáticos.

Con Iván Duque, de 2018 a 2022, se llega al peor momento. Duque reconoce a Juan Guaidó como presidente interino; Maduro rompe relaciones al día siguiente. En ambos lados se cierran embajadas y consulados, también los pasos fronterizos y los vuelos entre ambos países. La ruptura es total.

La llegada de Petro, en 2022, supone un avance hacia una normalización de relaciones, pero, a pesar de sus afinidades de izquierda y de compartir la “mano blanda” con el ELN y las FARC, se producen roces frecuentes y no se recupera una confianza definitiva ni hay retorno a la fluidez de relaciones diplomáticas, comerciales y culturales que se tuvo en la era Pastrana y las décadas anteriores.

Ahora, en el año 2026, dos hechos contundentes: la encarcelación de Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez presidenta interina de Venezuela bajo la tutela de Washington, de una parte, y la derrota de Petro y el arribo de su contendor de derecha extrema Abelardo de la Espiella a la presidencia, de la otra,



¿UNA NUEVA ERA DE RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y V

marcan una nueva situación cuyo destino aún es incierto.

Es un tiempo de paradojas. Durante todos estos años, las relaciones entre ambos países y, por lo tanto, el intercambio comercial, mejoraban cada vez que había afinidades ideológicas o necesidades de apoyo en temas álgidos entre los presidentes. Pero esta vez no hay afinidad ideológica; el régimen venezolano sigue declarándose “socialista”, protegiendo a las FARC y el ELN, y celebrando a Fidel y el comunismo.

El presidente colombiano, recién estrenado, en cambio, es abiertamente anticomunista, antiestatista, defensor de la economía de mercado y, sobre todo, está dispuesto a “destripar” —fue la palabra utilizada por De la Espiella— a la izquierda y a la guerrilla.

Pero, y he allí la gran paradoja, ambos regímenes expresan fidelidad a la administración Trump. En el caso de Venezuela, en forma de tutela con visos



VENEZUELA?

de protectorado; en el de Colombia, como aliado fundamental. En Venezuela, la ayuda económica estadounidense ya no es un pecado imperialista; en Colombia se trata de retomar el hilo de una vieja relación.

Las actividades diplomáticas entre ambos países se han tornado cada vez más activas y la estrategia colombiana está marcada por la avanzada comercial. Queda clara con el nombramiento como embajador de Jorge Jaller, un alto ejecutivo de una importante cadena de distribución de alimentos del país. También en la incursión de Jaime Gilinski, el empresario dueño de la revista Semana, quien ya ha firmado, cara a cara con Delcy Rodríguez, la intervención en el negocio petrolero venezolano. Lo que hace prever que las relaciones entre ambos países esta vez no estarán perturbadas por temas ideológico-políticos, sino aceitadas por la sed de inversión extranjera que tiene Venezuela y la

oportunidad de recuperar el mercado venezolano por parte de Colombia.

Sin embargo, hay temas aún candentes. El de la migración: De la Espriella realizó una confusa declaración anunciando deportaciones masivas de “migrantes ilegales”, asociándolos a la delincuencia, lo que causó grandes inquietudes entre la comunidad venezolana y las ONGs de derechos humanos. Días más tarde rectificó y empleó el término ajustado al derecho internacional de “migrantes en situación irregular”. Claro está, quien cometa un delito debe ser procesado individualmente ante la ley, y no como parte de un colectivo nacional.

Con respecto a la legitimidad del “gobierno interino” y a la pérdida de la democracia en Venezuela, De la Espriella ha sido cauto. Se ha abstenido de opinar sobre la legalidad o no del gobierno, ya no tan interino, presidido por Rodríguez con el apoyo incondicional de Trump. Tampoco ha expresado, hasta el momento, reclamo formal sobre la presencia del ELN y las FARC del otro lado de la frontera. Lo que no se sabe aún es cómo resolverá su promesa de eliminar de raíz a la guerrilla sin exigirle al gobierno vecino que cese la protección a los irregulares.

En su relación con Venezuela, predominantemente marcada por intereses económicos, Trump ha colocado en segundo lugar los temas asociados al retorno a la democracia, pero no el tema de seguridad. Lo que explica que, en su reciente visita a Colombia, el secretario de Estado Marco Rubio hizo claro hincapié en la necesidad de que sean erradicados de Venezuela los grupos terroristas.

Ambos modelos apenas comienzan. El de Venezuela se estrena como “buen amigo” de los Estados Unidos y pasa a formar parte junto a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia de lo que algunos llaman la “ola naranja”, refiriéndose a los gobiernos suramericanos que, con la excepción de Brasil, se afilian a los principios de la llamada doctrina MAGA.

El próximo mes, entre el 14 y 15 de octubre, se realizará en Cúcuta un evento denominado “Gran Encuentro de la Frontera”, promovido por la Cámara Colombo Venezolana para celebrar el quinto aniversario de la reapertura de la frontera entre Norte de Santander y Táchira. El objetivo es claro: “fomentar el comercio, la inversión y las relaciones fronterizas”. ¿Será el símbolo de los nuevos tiempos de las relaciones entre ambos países en donde las diferencias ideológicas y distintas maneras de valorar la democracia no sean obstáculos para el intercambio económico?



REPARTO DEL BOTÍN PETROLERO VENEZOLANO

Eddie A. Ramírez S.

Venezuela siempre fue el principal socio comercial y un suplidor confiable para Estados Unidos de petróleo y productos derivados. Esta relación cambió cuando Hugo Chávez y Nicolás Maduro-Delcy Rodríguez llegaron a la presidencia. Para favorecer a China e India, cortaron el suministro a nuestro mercado más cercano y que nos producía mayores ganancias. Además, se hicieron cada vez más críticos de nuestro aliado tradicional, permitieron que fuésemos un aliviadero de la guerrilla colombiana, favorecieron el tráfico de cocaína hacia el norte y apoyaron las dictaduras de extrema izquierda de Cuba y Nicaragua, creando focos de desestabilización política.

A esta situación hay que agregar que hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo, con unos 13,6 millones de barriles por día (b/d). Sin embargo, importa unos seis millones de barriles por día y exporta

cuatro millones de b/d. Sus reservas tienden a declinar rápidamente, estimándose que se agotarán en unos diez años. Con la difícil y siempre inestable situación en el Oriente Medio, y teniendo cerca a Venezuela, cuyas reservas son cuantiosas, era lógico que Estados Unidos dirigiera su mirada hacia nuestro país. Lamentablemente, el régimen le cerró las puertas.

El harakiri de Maduro: Pudo evitar su extracción y la de su esposa, Cilia Flores, pero fue terco y pensó que podía seguir burlándose de la voluntad de los venezolanos. Si hubiese reconocido el triunfo electoral de Edmundo González, no estarían en una cárcel en Nueva York. Más importante aún, nuestra soberanía no hubiese sido violada; el presidente Trump no hubiese podido imponer a Delcy Rodríguez como presidenta de facto, apoderarse de parte de nuestro petróleo, ordenar aprobar leyes por la vía rápida ni seleccionar quiénes son los negociadores de nuestro futuro. Maduro se humilló y, de paso, nos humilló a todos.

Como Maduro no quería nada con “el imperio”, la opción obvia era extraerlo, lo que aplaudimos todos los demócratas, ya que el régimen de terror imperante impedía que los venezolanos pudiésemos sacarlo.

El error del presidente Trump: Se puede entender que, por falta de conocimiento o temor a inestabilidad política, cometió el error de dejar a la señora Rodríguez, con quien pareciera que negociaron antes de la extracción de Maduro, así como tolerar a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López, por quienes la DEA ofreció millones de dólares por su captura.

Lo injustificable es que ni el presidente Trump ni su secretario de Estado, Marco Rubio, presionen para que se realice pronto la elección presidencial. Como consecuencia, al no existir un Estado de derecho, las grandes petroleras, que tienen tecnología de punta, disponibilidad de dinero para las inversiones necesarias y recursos humanos, han decidido no correr riesgos. Ello obligó a Trump a inventar que su Departamento de Guerra se asocie con una empresa pequeña y sin credenciales. ¡Qué diferencia con respecto a la Apertura Petrolera al sector privado, realizada con gran transparencia y sin ventajismo en la década de los años 1990!

El acuerdo: El 3 de septiembre de este año se firmó un acuerdo entre la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América (OSC) para la explotación de diecisiete campos petroleros en Venezuela.



El Departamento de Guerra recibió gratuitamente el derecho a una participación del 35 por ciento de la empresa NABEP, adquirir a precio de costo el 20 por ciento del petróleo producido y la prioridad de obtener el restante 80 por ciento. El acuerdo es a cien años, algo nunca visto en Venezuela, donde las concesiones petroleras han sido de cuarenta años. El número exagerado y ridículo de años quizá sea parte de la campaña electoral de Trump. Dudamos que, después de cincuenta años, el petróleo siga siendo importante.

El presidente Trump declaró que “Estados Unidos de América acaba de cerrar con Venezuela el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, que asegura el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”. Esto es falso: las reservas son de Venezuela. Lo que sí es cierto es que este acuerdo puede ser la mayor apropiación indebida de la historia mundial por parte de una potencia otrora considerada amiga.

La cuantía del botín

Sin duda, es más grande e importante que el obtenido por cualquier conquistador o pirata. Es importante porque el petróleo es la energía que permite el crecimiento de la economía mundial. Grande, porque la cantidad de petróleo existente en los yacimientos de esos diecisiete campos es inmensa.



Está claro que las reservas no forman parte del botín porque nuestra Constitución establece que son inalienables. Son grandes, pero menos de los 65.000 millones de barriles publicitados. Sin embargo, para los socios, recibir gratuitamente diecisiete campos, que deben incluir varios yacimientos y cientos de pozos, mientras que la competencia no tenga estas ventajas, es el mejor negocio del mundo.

¿Qué gana Delcy Rodríguez? Con el apoyo de Trump-Rubio, aspira a mantenerse en el poder un tiempo más, en un país que ella contribuyó a empobrecer, pero que tiene ingresos cuantiosos por el petróleo y la minería, por lo que es un botín inmenso para ella y para su grupo político.

No tiene ninguna probabilidad de ganar una elección, por lo que seguir llenándose el bolsillo es el objetivo de quienes, el 3 de enero, cambiaron las consignas antiimperialistas y su amor a Fidel Castro por alfombras rojas al secretario de Energía y al jefe del Comando Sur, y por ceder gratuitamente diecisiete campos petroleros, sin licitación, a la empresa NABEP y al Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

¿Qué gana y qué pierde Estados Unidos? Su ganancia es obscena. Sin embargo, pierde moralmente ante los venezolanos y el resto del mundo al obtener esas condiciones bajo presión y asociarse con una empresa pequeña, sin capacidad para desarrollar los campos asignados y cuyo socio principal, Alejandro Betancourt, tiene muy mala fama por las investigaciones por lavado de dinero y por no tener cómo justificar la enorme fortuna que exhibe sin pudor.

El presidente Trump declaró que el acuerdo era

positivo, entre otras ventajas, porque desplazaba a los rusos presentes con la empresa Gazprombank, asociada con PDVSA en la empresa

Petrozamora. Sin embargo, omite que Alejandro Betancourt y sus socios en la empresa Derwick tienen o tenían participación con los rusos en la empresa mixta Petrozamora. Además, Derwick es la empresa que los venezolanos rechazamos por haber recibido millones de dólares para adquirir e instalar plantas de generación de electricidad y no haber cumplido con lo acordado en el contrato.

¿Por qué NABEP ofreció gratis esas condiciones? Sin ninguna duda, el precio que pagaron su principal accionista y NABEP es para lograr la protección del Departamento de Guerra. Algo similar a lo que hace la mafia al brindar protección a los pequeños comerciantes. ¡Qué vergüenza!

La información suministrada por Juan Szabo y Luis Pacheco en la publicación del portal digital La Gran Aldea del 1 de septiembre, indica que esa empresa produce 73.000 b/d en Petrozamora y 38.000 b/d en Petrocedeño, para un total de solo 111.000 b/d. Sin embargo, al parecer, ya le han otorgado Convenios de Participación Productiva.

Los venezolanos rechazamos este bochornoso acuerdo, que corresponde al botín de guerra que descaradamente anunció el presidente Trump al afirmar que al vencedor pertenecen los despojos.

Crisis de infraestructura en Venezuela



¿CÓMO PUEDE FUNCIONAR UN PAÍS?

Alfonso Molina

En los 26 años que llevamos del siglo XXI, Venezuela ha enfrentado severos problemas de infraestructura, originados no solo en la ausencia de inversión pública en nuevas obras, sino también en la deficiencia de su necesario mantenimiento. Durante este período, los ingresos de divisas por las exportaciones petroleras han sido más altos que en las décadas previas, pero han sido reorientados hacia fines utilitarios y geopolíticos. No existen cifras consolidadas y transparentes sobre la inversión oficial en los mecanismos que han permitido este insuficiente funcionamiento del país.

Entre los sectores más afectados figuran la deprimida industria petrolera, el agotado sistema de energía eléctrica, la frágil situación del transporte vial, portuario y aéreo, los debilitados servicios básicos de agua, gas y telecomunicaciones y la fallida construcción de viviendas, escuelas, hospitales y demás edificaciones comerciales e institucionales. Cada una de estas áreas se encuentra en crisis, especialmente las dos primeras

que —según los expertos— constituyen las piezas fundamentales de la reconstrucción nacional en la medida en que aportan los recursos financieros para ejecutar las obras y la capacidad de impulsar la puesta en marcha de tales obras.

Exploración, extracción y refinamiento de los hidrocarburos: las áreas más importantes de la crisis de infraestructura del país

Como es del conocimiento público, la original, poderosa y eficaz Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fundada en 1976 con la nacionalización de la industria, ha sido destruida sistemáticamente. Tras la expulsión por parte de Hugo Chávez de casi veinte mil profesionales y trabajadores en 2002, la empresa se convirtió en una plataforma burocrática con alto incremento en la nómina y sin capacidad de crecimiento operativo. De la previsión de producir tres millones de barriles diarios de crudo hace dos décadas al bombeo actual de apenas un millón cien mil barriles diarios. Una especie de ‘caja chica’ de los objetivos políticos del gobierno y epicentro de un proceso de corrupción desmesurado.



Con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, el país atrae hoy la atención de inversionistas que buscan posicionarse temprano en un mercado con potencial de recuperación, pero la realidad operativa y política impone barreras significativas. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela bombeó poco más de un millón de barriles diarios (bpd) en junio de 2026, un incremento del 17,6% respecto a 2025, aunque menos de la mitad de los 2,1 millones de bpd de hace una década.

La infraestructura es el principal cuello de botella para la reestructuración de Pdvsa. Expertos calculan que se requieren entre 100.000 y 220.000 millones de dólares para reparar y modernizar la industria, con estimados de 65.000 millones solo para infraestructura y 180.000 millones para alcanzar la producción de tres millones de bpd sostenidos. La firma Rystad Energy estima que mantener la producción actual de 1,1 millones de bpd demandaría 53.000 millones de dólares en 15 años, mientras que el crecimiento sostenido exigiría entre 8.000 y 9.000 millones anuales adicionales hasta 2040. Cifras que parecen de ficción.

La banca de inversión y valores Goldman Sachs estima que, con estabilidad política en el país y colocación financiera estadounidense, la producción podría crecer hasta 500.000 bpd adicionales en dos años, pero advierte que las compañías energéticas no comprometerán capital significativo sin garantías contractuales, cambios regulatorios y respaldo bipartidista de Washington.

En este marco surge el llamado acuerdo petrolero entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de

Delcy Rodríguez, impuesto por el propio Donald Trump, que ha estimulado la crítica de los sectores político y energético dentro y fuera de Venezuela.

La organización Transparencia Venezuela centró sus cuestionamientos en el acuerdo petrolero anunciado por la Casa Blanca el 31 de agosto, que, según la información difundida, contemplaría la explotación de 17 campos en el país y una insólita vigencia de hasta 100 años, una dimensión tan exagerada que ha generado interrogantes entre expertos petroleros, abogados, académicos y distintos sectores tanto venezolanos como estadounidenses.

Transparencia Venezuela advirtió sobre las dudas que persisten en torno al acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos y reclamó al Gobierno venezolano publicar el convenio completo, los contratos asociados y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la explotación de los campos petroleros involucrados.

En un comunicado divulgado bajo el título “Convenios para una transición transparente, legítima y con capitales constructivos”, la organización reconoció que Venezuela necesita con urgencia inversiones nacionales y extranjeras, particularmente en la industria petrolera, considerada una de las principales ventajas competitivas del país.

Sin embargo, sostuvo que la necesidad de atraer capital no puede justificar acuerdos sin información pública suficiente. A su juicio, después de años de opacidad, corrupción, debilitamiento institucional y falta de rendición de cuentas, cualquier nuevo convenio estratégico debe estar sometido a reglas claras y mecanismos de supervisión.

Las autoridades interinas venezolanas nombradas por Washington para que coordinen la estabilización económica y la transición de la tiranía a la democracia, es decir, los actores del mismo régimen que destruyó el país y dicha industria, han concedido a North American Blue Energy Partners (Nabep), una empresa petrolera privada y desconocida, la explotación durante esos 100 años de los 17 yacimientos que representan unas reservas probadas de petróleo de 65.000 millones de barriles que, según voceros de la Casa Blanca, nutrirán las reservas estratégicas de EE.UU. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado en varias entrevistas que dicho acuerdo no es con el interinato de Rodríguez, sino con la empresa Nabep de Alejandro Betancourt, persona que, según expertos, no tiene noción de la industria petrolera. Esta respuesta aumenta las opacidades de este trato, debido a que Betancourt arrastra una fama de presunto operador de contratos fraudulentos en la construcción de centrales eléctricas en Venezuela con la empresa Derwick Associates y en el lavado de capitales en Suiza, Inglaterra y España, aparte de las graves acusaciones criminales contra él, formuladas en 2023, en intervenciones públicas tanto por Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello, parte del triunvirato ilegítimo que continúa en el gobierno bajo el protectorado norteamericano.

Generación y distribución de la energía eléctrica: el segundo sector en crisis de infraestructura

La situación del sistema de energía eléctrica en Venezuela hoy continúa siendo sumamente crítica, caracterizada por severos racionamientos, constantes fluctuaciones (bajones) e interrupciones prolongadas que se extienden por casi todo el territorio nacional.

Antes había dependido —desde los años sesenta del siglo pasado— de grandes obras como la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, que nutrió hogares, calles, industrias, servicios públicos, etcétera, y permitió también la exportación de electricidad a países vecinos. Hoy sufre de constantes problemas de mantenimiento.

La región zuliana sigue siendo el epicentro de la crisis energética en el país. Los habitantes de Maracaibo y otros municipios denuncian cortes diarios de electricidad que duran entre cinco y seis horas, una situación de vulnerabilidad estructural que la entidad arrastra desde hace más de 16 años.



La falta de inversión y preservación ha impulsado la irregularidad en el suministro e, incluso, ha provocado grandes apagones en el mapa nacional. Ciudades de tradición industrial como Valencia han reducido su capacidad de producción de bienes y servicios por las limitaciones eléctricas en ocho horas diarias. Expertos señalan que la termoeléctrica Planta Centro (con capacidad de 2,600 MW) está generando cero megavatios, dejando a la región dependiente de aportes mínimos de otras plantas.

Ciudadanos de Bolívar, Barinas, Falcón, Lara, Anzoátegui, Trujillo, Táchira y Mérida reportan diariamente la inestabilidad del suministro, lo que provoca constantes daños a los electrodomésticos debido a los sobrevoltajes (que llegan a superar los 140V-146V en las líneas residenciales).

Mientras el país ha vivido prácticamente con electricidad nula, Caracas y el estado Miranda habían sido las zonas privilegiadas hasta que la insuficiencia energética las ha alcanzado con vigor.

Pero, además, el sector ha sido víctima de contratos incumplidos por parte de empresas como Derwick Associates, fundada a principios de siglo por Alejandro Betancourt y sus socios. La empresa recibió entre 2009 y 2011 —sin licitación— 12 contratos para construir 11 nuevas plantas eléctricas y uno para modificar una existente por un monto de 5.000 millones de dólares.

Los otros sectores

El transporte vial, portuario y aéreo es el eje vertebral de la logística del país y componente fundamental del comercio nacional e internacional, pero enfrenta importantes desafíos estructurales que impactan directamente la eficiencia de la cadena de suministro.

El sector portuario avanza gradualmente con planes estatales para transformar los puertos en centros logísticos y recuperar la operatividad. Sin embargo, históricamente se han enfrentado cuellos de botella por centralización, burocracia aduanera y limitaciones en la infraestructura pesada. El estado actual de su infraestructura genera un impacto directo de retrasos, costos elevados e ineficiencias en toda la cadena logística nacional.

Lo mismo sucede con el transporte aéreo. Después de los efectos devastadores de los dos terremotos del 24 de junio pasado, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), el más importante del país, ha perdido 80% de su operatividad. Antes de esta tragedia, el sector aeronáutico mostraba una reactivación progresiva mediante un plan nacional de contingencia, que había recuperado cerca de 49% de vuelos nacionales y 46% de rutas internacionales con alrededor de 19 aerolíneas activas. A pesar de esta mejora, la oferta general de conectividad sigue siendo inferior a los niveles óptimos del pasado.

El transporte terrestre es el eje fundamental del desplazamiento de pasajeros y de carga en el país. Implica la inversión y mantenimiento de autopistas, carreteras y caminos en todo el mapa nacional que permita la conectividad de personas y mercancías.

A lo largo de los últimos cien años, los distintos gobiernos de Venezuela han desdeñado el desarrollo de una red de ferrocarriles que unan a los ciudadanos de distintos puntos del país de forma rápida y económica, por una parte, y que facilite el transporte de materias primas y bienes de consumo. Antes, Venezuela era famosa por sus autopistas. Hoy la situación se ha deteriorado notablemente.

Determinar una cifra exacta de cuánto se invierte formalmente en el transporte terrestre en Venezuela es complejo debido a la opacidad en las cuentas públicas y a la alta volatilidad económica.

La red de servicios básicos como agua, gas y telecomunicaciones. En Venezuela constituye un problema estructural, cuyas bases están sentadas en la falta de mantenimiento y de inversión canalizada para la modernización de sistemas antiguos y deteriorados,



por lo que cualquier solución debe responder a un plan que no solo resuelva las crisis momentáneas, según expertos.

Se trata de sistemas de tuberías, cables y estaciones que transportan agua, gas y telecomunicaciones directamente a los hogares y ciudades. Estos servicios son indispensables para mantener la salud, la comodidad y la comunicación diaria.

La construcción y dotación de viviendas, escuelas, centros de salud y edificaciones comerciales e institucionales constituyen el pilar fundamental del desarrollo urbano, la infraestructura pública y el bienestar social de cualquier país. Este proceso integral no solo abarca el diseño y el levantamiento de las estructuras físicas, sino también el equipamiento y mobiliario técnico necesario para que cada espacio cumpla plenamente su función.

El efecto devastador de los dos terremotos del 24 de junio de este año revela la fragilidad de la construcción en Venezuela en las últimas dos décadas, caracterizada por la ausencia de planificación y el uso inadecuado de materiales, y también los efectos de la corrupción en la edificación —sin licitación— de viviendas, escuelas, hospitales con sobreprecios y otras formas de enriquecimiento ilícito.

Todo lo anterior describe un panorama crítico de la infraestructura de un país que necesita emprender su reconstrucción física y emocional, que debe ir acompañada de instituciones legítimas que respondan a los intereses de millones de ciudadanos.



Entre la cautela esperanzada y la expansión entusiasta

LA APUESTA EMPRESARIAL DE COLOMBIA EN VENEZUELA

Gobiernos, gremios e inversionistas parecen coincidir en recuperar lo que una vez fue un intercambio de miles de millones de dólares, pero ahora con lecciones aprendidas. No basta vender y comprar, tenemos que reconocernos.

Jeanfreddy Gutiérrez Torres

El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia ha sido tan profundo e intrincado como sus lazos históricos, culturales y políticos. Incluso en medio de los turbulentos desencuentros entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez, en 2008 el comercio bilateral superó los 7.200 millones de dólares. Venezuela aún gozaba de abundancia de ingresos petroleros, con lo que le compraba cientos de distintos productos, mientras enviaba un puñado de productos petroquímicos.

Este desequilibrio comercial, que incluía a los “bachaqueros” originales que llevaban gasolina prácticamente gratuita del

Táchira al Norte de Santander en inmensos Malibú o del Zulia a La Guajira en pimpinas que cargaban mujeres wayuu a la espalda, se recupera lentamente después de la reapertura de la frontera en 2022. El intercambio es apenas una fracción de lo que fue, con unos 1.170 millones de dólares para el 2025, con el superávit acostumbrado: Venezuela solo exportó 100 millones en mercancías hacia Colombia.

Pero a ocho meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la firma del “acuerdo petrolero histórico” entre el otrora “imperio” y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, mucho del legado político y legal del chavismo se ha ido, especialmente la guerra contra la propiedad privada.



Las nuevas leyes de minería, energía eléctrica y petróleo reabrieron estas industrias a la inversión petrolera extranjera, con posibilidad de arbitraje internacional y sin necesidad de mayoría estatal. Música para los oídos de los inversionistas.

Así mismo, escuchar a la presidenta encargada invitando a los empresarios a volver al país contrasta con los anuncios furiosos de expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron intereses colombianos como los de Almacenes Éxito, para transformarlos en Abastos Bicentenario, así como de empresas ubicadas más cerca de la frontera compartida, como Ciamsa (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles) en Táchira y la Corporación Cemento Andino (Argos) en Trujillo.

Pero hay bemoles en las dudas razonables —y las críticas internas— sobre la legitimidad de las decisiones rubricadas por Rodríguez que podrían ser anuladas o no reconocidas por un próximo gobierno electo democráticamente.

Así mismo, la incertidumbre sobre la transición política de tres fases impulsadas por Estados Unidos.

Aun así, el diario La República enumera más de 25 firmas con planes para volver a Venezuela, desde aerolíneas a constructoras, pasando por agroindustriales y petroleras, muchas de ellas colombianas.

Con una dinámica migratoria más bilateral, con cientos de miles de ciudadanos de cada país viviendo en el otro, las aerolíneas se apuntan a establecer o aumentar sus frecuencias. Avianca, Latam Colombia y Wingo reactivarán sus vuelos Bogotá-Caracas con distintos planes para conectar también a Medellín, Valencia y Maracaibo.

Pero el ejemplo más claro de interés comercial es el expresado por el Grupo Gilinski, que adquirió en julio de 2026 el cien por ciento de Helados Tío Rico por medio de Nutresa, cuando declararon la intención de “inundar Venezuela lo antes posible con chocolates, galletas, helados y café”. En ese momento, Gilinski le dijo a

Bloomberg que sería mediante el aumento de producción en Colombia y posterior traslado en camiones por vía terrestre por la frontera.

Dos meses después, Luisa Fernanda Carrizosa, gerente de Mercadeo del Negocio de Helados del Grupo Nutresa, tuvo que matizar el entusiasmo. Le dijo a Portafolio que no han asumido aún la operación por completo y que sus estudios de mercado les arrojaron que los venezolanos son muy apegados a la tradición de marca. Por tanto, apuntan a fortalecer Tío Rico, en lugar de traer marcas consolidadas en Colombia.

Sin embargo, su interés en el país está intacto. El 4 de septiembre, Jaime Gilinski voló a Caracas para firmar un acuerdo con Delcy Rodríguez por 25 años entre PDVSA y Geopark para la explotación del bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde ya hay producción e infraestructura, pero bajo desempeño por parte de PDVSA. La idea es triplicar la extracción de crudo extrapesado para el 2030 hasta llegar a unos 95.000 barriles diarios a partir de los apenas 11.000 actuales.

El cambio de tono en Miraflores no podría ser más evidente. “Me alegra mucho que este acuerdo y otras inversiones que el grupo está haciendo en el país se sumen para abonar a la buena cooperación entre países hermanos como Venezuela y Colombia”, dijo Rodríguez. Por su parte, Gilinski habló de “inversión responsable” que planea extenderse por décadas. “No llegamos como observadores cautelosos, sino como socios dispuestos a poner nuestro capital, experiencia y

nombre al servicio de un proyecto que genere valor compartido”.

Otras firmas son más cautas. El Grupo Argos, por ejemplo, que está exportando a Venezuela desde Cartagena y Sogamoso vía Cúcuta, dice que lo hace con “capital controlado”, pues considera que una expansión en territorio venezolano implica “soñar con la devolución de activos o pago en especie para que nos compense la contingencia grande con el gobierno venezolano”, según palabras de su presidente, Juan Esteban Calle. La cita proviene de una nueva sección de Valora Analitik, medio colombiano especializado en economía, llamada Inside Venezuela-El potencial que despierta. Estrenada el 30 de junio, hace un seguimiento de la renovada relación comercial entre ambos países a partir de 2026. Otra señal de un movimiento binacional de retorno comercial.

Del lado público también se apuesta por la reintegración económica. Así se lee la línea de crédito creada por el estatal Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) de 100 millones de dólares durante los últimos meses de la administración Petro y que en septiembre anunció una alianza con tres bancos venezolanos, para que certifiquen cartas de crédito por otros 40 millones de dólares para financiar operaciones de exportadores colombianos en Venezuela.

Así mismo, se puede tomar la designación del empresario Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador en Caracas por parte del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Con experiencia en el Grupo Éxito, el diplomático presentó su visión de la relación bilateral en el Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en Cartagena, en agosto de 2026.

Jaller citó un plan sistemático y cooperativo, basado no solo en los 2.219 kilómetros de frontera, sino en las semejanzas lingüísticas, gastronómicas y hasta emocionales, como el cariño por Simón Bolívar. Presentó un

programa de tres fases —otra vez— que entre 2026 y 2028 pase de “renacer” a una plena cooperación de empresas de ambos países, apelando también a los ejemplos de éxito de las empresas Polar y Farnatodo en Colombia.

De esa forma, planteó un balance que considera tanto las dificultades actuales como la reconstrucción como oportunidad. Por un lado, está la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y las consecuencias de la emergencia humanitaria, así como las del doblete sísmico, pero del otro está la capacidad industrial instalada, actualmente ociosa en un 50 por ciento, los millones de hectáreas de tierras productivas que necesitan maquinaria y la necesidad de desarrollar 2 millones de metros cuadrados de superficie, cientos de kilómetros de carreteras y cientos de miles de toneladas de cemento que se requieren.

Jaller dice que no es solo “comprarle gas” a Venezuela y venderle productos terminados. Al contrario, dice que “hay que quitarle la sábana al fantasma y estudiar a Venezuela con rigor”. Que, a pesar de las semejanzas, hay que estudiar, analizar y comprender la realidad, similar pero distinta, de países. “A partir de esas realidades tenemos que construir juntos y encontrar las áreas en las que existen fortalezas de ambos lados”.

Su meta es la institucionalización, ese verdadero “El Dorado” tantas veces perseguido. Jaller aspira a que, más allá de la importación-exportación, se hagan alianzas entre gremios y que, además de la Andi, participen Conindustria y la Cámara de la Construcción de

Venezuela, así como la Embajada de Colombia y Procolombia, para que la aspiración de volver a un intercambio entre 2 y 3 mil millones de dólares no provenga de esfuerzos separados, sino que además se sostenga en el tiempo, con una relación entrelazada que aproveche las fortalezas de cada país y beneficie a ambos pueblos.



Con enfoque de DD.HH.

ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES NATURALES

Juan Navarrete Monasterio

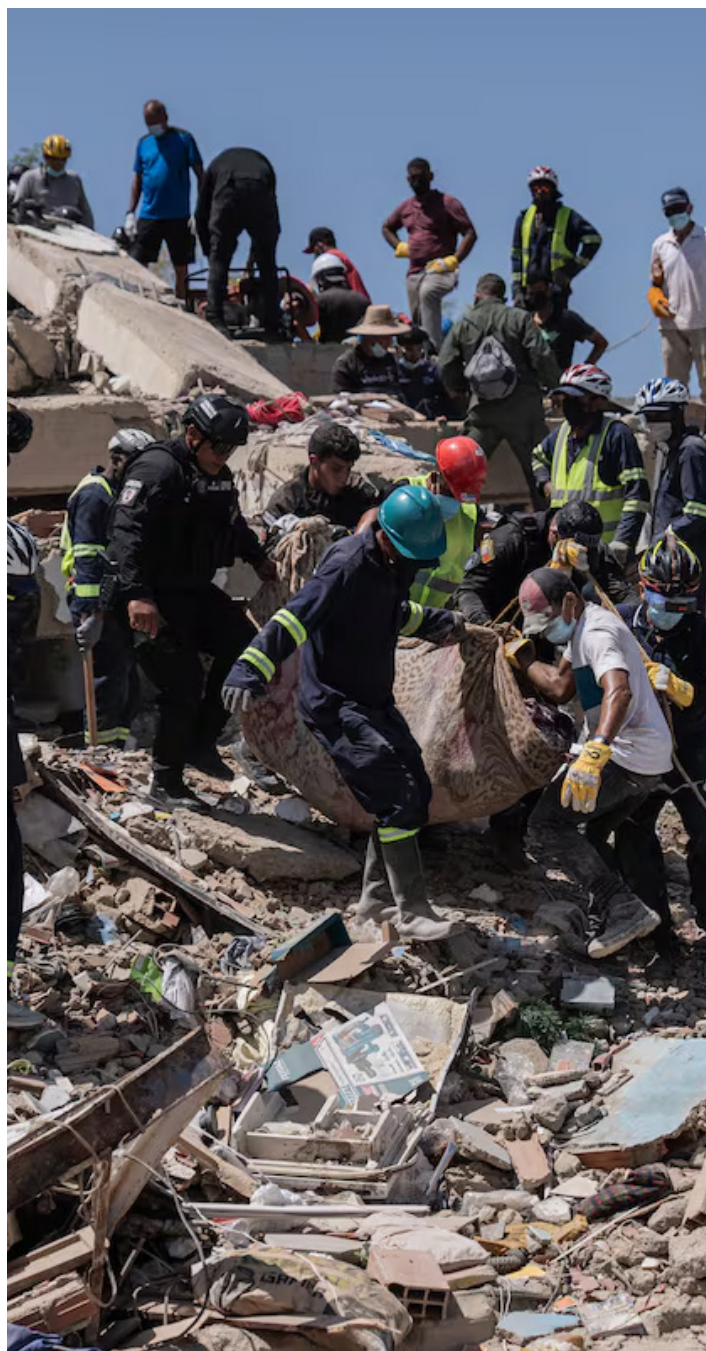
La asistencia humanitaria es la ayuda destinada a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad humana en contextos de crisis, conflictos o desastres. El 24 de junio, en Venezuela, ocurrió un doble terremoto que afectó principalmente a La Guaira y Caracas; en Colombia, el 10 de agosto, un terremoto que repercutió en cuatrocientos municipios en el Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

En sentido amplio, la asistencia humanitaria no solo responde a la urgencia inmediata, sino que también busca reducir daños y sostener condiciones mínimas de vida. En Colombia, la Unidad para las Víctimas la define como un derecho para víctimas de hechos violentos distintos del desplazamiento forzado, con medidas como alimentación, aseo, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

El marco normativo internacional de la ayuda humanitaria se apoya en varias etapas y principios que, en conjunto, regulan cuándo, cómo y con qué límites debe prestarse asistencia a personas afectadas por conflictos armados, desastres y otras crisis. En términos prácticos, combina el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las reglas sobre respuesta internacional a desastres y los estándares de calidad y rendición de cuentas.

Actualmente, producto del cambio climático, hemos experimentado varios desastres naturales generados por los fenómenos denominados como El Niño y La Niña, sequías, prolongadas lluvias, terremotos, temporadas de huracanes, tornados y deslaves, entre otros.

La ayuda humanitaria se rige por cuatro principios ampliamente aceptados: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. En la práctica, esto





deben adoptar medidas reforzadas de protección para grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando acceso no discriminatorio a la asistencia, prevención de violencia y explotación, participación efectiva, protección de la unidad familiar y adecuación de albergues y servicios”.

Los recientes terremotos en Venezuela generaron una respuesta humanitaria internacional rápida, con equipos de rescate y ayuda enviados por varios países y por Naciones Unidas hacia las zonas más afectadas. Las noticias disponibles reportan daños severos, muchas víctimas y una movilización de asistencia centrada en búsqueda y rescate, atención médica y socorro básico.

Obstáculos a la asistencia humanitaria

En el caso de Venezuela, hubo restricciones de acceso a las zonas afectadas. Las autoridades limitaron el ingreso de vehículos y personas a áreas críticas, lo que retrasó rescates y entregas de insumos. Además, entre otros, hubo:



Congestión y daño de infraestructura: el colapso de la carretera principal hacia la zona del desastre y el deterioro de puentes y vías ralentizaron ambulancias, rescatistas y camiones con ayuda.

Burocracia y controles excesivos: se reportaron alcabalas, permisos de entrada, controles de combustible y cierres locales que dificultaron la llegada oportuna de suministros.

Riesgo de politización o desvío: varias denuncias apuntaron a trabas impuestas por autoridades y sospechas de corrupción, lo que afecta la rendición de cuentas y desalienta a algunos donantes.

significa que la asistencia debe dirigirse a salvar vidas y aliviar el sufrimiento, sin tomar partido político o militar, y distribuyéndose según necesidad, no por afinidad, nacionalidad, religión o ideología.

La respuesta ante desastres naturales se sustenta en el derecho internacional de los derechos humanos, las normas y principios humanitarios y la práctica emergente sobre protección de personas en casos de desastre. Aunque no existe un tratado único y universal que regule de forma exhaustiva estos supuestos, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU ha sistematizado reglas aplicables sobre asistencia, consentimiento, deber del Estado afectado y protección de las personas: “En situaciones de desastre natural, los Estados y los actores humanitarios

En materia humanitaria, el Estado tiene la principal responsabilidad y obligación de proteger la vida, la integridad y el bienestar de la población dentro de su territorio, especialmente en desastres y emergencias complejas. Esto incluye coordinar, regular y supervisar la asistencia de socorro, así como organizar la respuesta y la recuperación. Toda esta acción del Estado debe estar centrada en la dignidad del ser humano.

Lo que no se reconstruye con cemento

VENEZUELA, COLOMBIA Y LAS CAPACIDADES CULTURALES QUE APARECEN EN MEDIO DE UNA TRAGEDIA

Yesenia Camacho

Cuando ocurre un desastre, la respuesta parece tener un orden evidente. Primero hay que salvar vidas, atender heridos, garantizar agua, alimentos, refugio, salud y seguridad. Después vendrán las viviendas, las escuelas, los hospitales. La emergencia tiene una lógica material y urgente, y difícilmente podría ser de otra manera.

Pero hay algo que también se rompe y que no siempre aparece en los primeros balances: los vínculos, las rutinas, los lugares de encuentro, las formas de reconocerse en un territorio y aquello que permite a una comunidad sentirse todavía parte de una historia compartida.

¿Qué ocurre entonces con esa dimensión de la vida que no puede reconstruirse con cemento? Allí aparece otra respuesta a la emergencia, menos visible, pero

necesaria para la recuperación: la de la cultura. Los recientes terremotos de Venezuela y Colombia permiten observarlo con claridad. Dos países distintos, dos contextos diferentes, pero que tienen algo en común: en ambos casos, el desastre alteró de manera abrupta la vida cotidiana

de comunidades enteras y obligó a miles de personas a desplazarse, refugiarse y reorganizar sus rutinas mientras comenzaba la reconstrucción material.

Frente a una situación así, es comprensible que la primera pregunta sea cuánto hay que reconstruir, pero un territorio no está hecho únicamente de edificios. También está hecho de las relaciones que ocurren dentro de ellos, de las fiestas que se celebran en sus plazas, de las canciones que se cantan, de los objetos que guardan memoria y de las prácticas que permiten a las personas reconocerse como parte de una comunidad.

Y ahí aparece una segunda emergencia invisible que es mucho más difícil de contabilizar. Es la pérdida de las rutinas, la incertidumbre de no saber cuándo regresará la normalidad, el miedo a volver a entrar en una vivienda, la sensación de haber perdido el lugar que se reconocía como propio.





La emergencia material puede medirse en viviendas destruidas; en cambio, la emergencia cultural y comunitaria es más difícil de poner en una tabla. Por eso resulta interesante que, en medio de una catástrofe, aparezcan actores cuya tarea no consiste necesariamente en levantar una pared o distribuir alimentos.

Aparecen músicos, actores, artistas visuales, narradores, gestores culturales, bibliotecas, museos, colectivos comunitarios y trabajadores de la cultura. Personas que muchas veces llevan consigo algo que no ocupa demasiado espacio: una canción, una historia, un instrumento, un juego, una imagen o, simplemente,

la capacidad de reunir a otros.

Hay investigaciones recientes que documentan este fenómeno. Una revisión interdisciplinaria publicada en *Progress in Disaster Science* en 2026 encontró que las artes y las actividades culturales pueden contribuir a la conexión social, al bienestar comunitario, a la reconstrucción de la relación con el lugar y a la posibilidad de imaginar futuros alternativos. Pero el mismo estudio advierte que la evidencia todavía es limitada y que se necesita investigar mejor cómo y bajo qué condiciones estas prácticas producen efectos duraderos.

No se trata de afirmar que el arte cura una tragedia. Tampoco de

convertir cada actividad cultural en una intervención terapéutica. De hecho, una de las discusiones más interesantes en torno al papel de la cultura en las crisis está justamente en no reducirla a una herramienta para “hacer sentir mejor” a las personas y en que la cultura no debería considerarse una dimensión secundaria de la respuesta humanitaria.

Los segundos respondedores

En una emergencia solemos pensar en los primeros respondedores: bomberos, médicos, organismos de socorro, fuerzas de seguridad y organizaciones humanitarias. Son quienes atienden lo urgente y trabajan para proteger la vida y restablecer las condiciones básicas de seguridad. Pero existe otra categoría menos reconocida: los segundos respondedores.

El concepto ha sido estudiado por investigadores de la Universidad de Florida para referirse al papel que pueden desempeñar artistas y trabajadores culturales en comunidades afectadas por desastres, especialmente una vez atendida la emergencia inmediata. No se trata de sustituir a quienes salvan vidas, ni de asumir funciones para las que el sector cultural no está preparado. Se trata de reconocer que la recuperación también necesita vínculos, memoria, sentido de lugar y espacios para volver a encontrarse.

El papel de los segundos respondedores no es llegar para resolver la emergencia, sino contribuir a que, después de ella, las personas puedan volver a encontrarse, reconocerse y construir algo en común.

Venezuela y Colombia: capacidades distintas, una misma pregunta

Las experiencias recientes de Venezuela y Colombia no son iguales y no necesitan serlo, pero observarlas juntas permite encontrar una pregunta común: ¿qué puede poner el sector cultural a disposición de una comunidad cuando un territorio entra en crisis?

En Venezuela, algunos artistas llevaron sus prácticas directamente a los refugios. Otros colectivos se organizaron para sostener actividades culturales y recreativas para niños y familias. También aparecieron iniciativas que utilizaron el arte para registrar la experiencia. El artista venezolano Oscar Olivares, por ejemplo, creó “La luz entre los escombros”, una obra construida a partir de relatos e historias reales de personas vinculadas con la respuesta social a los terremotos. Su intención es que la obra pueda convertirse en un lugar de memoria para recordar lo ocurrido y la solidaridad que surgió después del desastre.

Aquí la cultura cumple otra función que invita a la pregunta: ¿qué vamos a recordar de lo ocurrido? Porque una emergencia también puede desaparecer rápidamente de la conversación pública, pero una obra, un relato, una canción pueden permanecer y aquello que permanece se convierte en una forma de reconstrucción de la memoria.

En Colombia, la respuesta cultural tomó otra forma. Trece días después del terremoto del 10 de agosto, artistas y numerosos actores de la industria del entretenimiento participaron en “Colombia: Voces por la vida”. El concierto reunió a más de 32.500 personas y recaudó 11.193 millones de pesos destinados a apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas. Productoras, técnicos, medios, marcas y artistas pusieron a disposición recursos y trabajo para hacer posible la iniciativa.

Aquí, la cultura se convirtió en capacidad de movilización. No solamente convocó personas, también movilizó recursos. Son respuestas diferentes, pero es que no existe una única respuesta cultural frente a un desastre. Tampoco existe una receta que pueda trasladarse de un territorio a otro. Lo que sí parece existir es un conjunto de capacidades que pueden activarse cuando el sector cultural reconoce que también forma parte de la respuesta.

Por eso nos interesa mirar los casos de Venezuela y Colombia no como historias inspiradoras de artistas



que “ayudaron” después de una tragedia, porque son algo más. Son pequeños experimentos sobre lo que la cultura puede hacer cuando una sociedad atraviesa una ruptura.

Por eso la cultura no debería aparecer solamente cuando todo lo demás ya está resuelto, tampoco debería ser convocada únicamente para “animar” un refugio, recaudar fondos o producir una imagen esperanzadora de la tragedia.

Su lugar debe ser más exigente. Puede estar en la preparación, en la respuesta y en la reconstrucción. Porque una emergencia no solamente pone a prueba la capacidad de un territorio para sobrevivir. También pone a prueba su capacidad para continuar. Y allí la cultura puede tener un papel que todavía estamos aprendiendo a nombrar: convocar, movilizar, sostener, reimaginar y preservar.

NOVELAS DE LA MIGRACIÓN: IDENTIDAD, VERGÜENZA Y MEMORIA

Luz Marina Rivas

Una de las consecuencias del reciente éxodo masivo de venezolanos, que alcanza para 2026 una cifra cercana a los nueve millones, ha sido el incremento de la xenofobia asociada al gentilicio.

Desde la psicología social, en un estudio hecho sobre migrantes colombianos transnacionales, Marco Alexis Salcedo Serna estudia la apreciación emocional subjetiva de la propia identidad, especialmente cuando el propio territorio se asocia con características negativas. Explica que un componente fundamental de la identidad social es la identidad espacial. Esta es la identidad asociada al territorio. Se trata de la pertenencia a un lugar en el cual se ha enraizado el sujeto con una comunidad, donde ha compartido prácticas sociales y culturales y al cual le confiere una significancia emocional.

¿Qué sucede entonces cuando se pierde ese territorio por la violencia, por necesidades económicas o persecución política para buscar mejores condiciones de vida? Necesariamente, esa identidad sufre cambios. Salcedo Serna explica que “la mayoría de los migrantes no logran concretar la integración social en los países de acogida, entre otras razones porque están cada vez más expuestos a entornos hostiles que propician condiciones de calidad de vida que, en el caso de los migrantes voluntarios, pueden resultar inferiores a las de su país de origen”.

Así ha sucedido con la migración venezolana más vulnerable, la que ha migrado sin información suficiente, muchas veces en condiciones de irregularidad, con precariedad económica. Entonces la autoestima y la identidad resultan lastimadas, especialmente cuando el territorio de origen se asocia a un territorio estigmatizado y devaluado. Dos jóvenes escritoras venezolanas han mostrado en sus novelas más recientes cómo se resquebraja la identidad y cómo se busca recuperarla. Ellas son María Elena Morán y Arianna de Sousa García.

VOLVER A CUÁNDO María Elena Morán

Siruela Nuevos Tiempos



Volver a cuándo (2022)

Esta novela ganó el premio Café Gijón en España. Su autora, María Elena Morán (1985) reside en Brasil. La historia se inicia con el incendio de un campamento de venezolanos que esperaban en Paracaima, cerca de la frontera con Venezuela, la autorización del gobierno para poder viajar al interior del país. El incendio fue provocado por la intolerancia de los vecinos.

Este evento llevado a la ficción ocurrió en agosto de 2018 y fue una muestra de los tantos episodios de xenofobia sufridos por venezolanos migrantes en

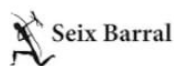
América del Sur. Nina, la protagonista, ha migrado desde Maracaibo, donde dejó a su hija Elisa al cuidado de la abuela Graciela. Esta última sufre aún el duelo por la muerte de su esposo. Tras el incendio y la huida de muchos venezolanos de vuelta a la frontera, ella elige seguir su camino. Queda a la intemperie, con su mochila chamuscada y un zapato con suela derretida, elementos que la acompañarán a lo largo de su odisea en Brasil. El rechazo de los brasileños la lleva a buscar vivir en Porto Alegre, porque busca una ciudad donde los venezolanos no sean considerados “una peste”. Su identidad se resquebraja. Se siente parte de un colectivo rechazado y devaluado. Su hija se niega a hablar con ella. La soledad la acompaña y hasta debe cambiar de identidad para acceder a una universidad donde se instalará a vivir a escondidas con otro nombre, el de un carnet robado a una local.

La recuperación de su venezolanidad y de su autoestima solo vendrá cuando recupere a la hija y a la madre, ya avanzada la novela, en México, cuando sea posible aceptar el pasado y conectar con la memoria del origen, simbolizada en la presencia de la madre y la protección espectral del padre. La recuperación de la hija simboliza, a su vez, un futuro posible, una esperanza de redención.

Atrás queda la tierra (2024)

Arianna de Sousa García reside en Chile. Su texto resulta en una hibridez de géneros: novela de no ficción, crónica epistolar, testimonio. Se trata de una larga carta dirigida a su hijo, en la que narra su historia personal entrelazada con la historia reciente, para explicar las motivaciones de la migración. Tiene tres grandes partes. Comienza con las narraciones de la degradación de la vida de la población venezolana: el hambre generalizada, los apagones, la represión política durante los años del chavismo. Continúa con una serie de episodios de xenofobia en diferentes países, varios de los cuales ocurren en Chile. Así, se narra otro incendio a otro campamento de migrantes venezolanos, provocado por chilenos en la frontera con Bolivia. Dice la narradora: “Todos migrantes, como nosotros”.

La vergüenza asociada al gentilicio se manifiesta en la empatía que le produce una madre venezolana que vende chocolates en el metro. La autoestima lastimada es también una identidad resquebrajada.



Arianna de Sousa-García

Atrás queda la tierra



Ella refiere luego una pregunta hecha al hijo sobre si se siente venezolano o chileno y el niño responde que ni lo uno ni lo otro. Entonces la narradora le dice que nunca olvide su origen.

En la recuperación de la memoria está la recuperación de una identidad venezolana. Al recordar el origen venezolano entroncado en otras migraciones, como la de los abuelos de Portugal y el Líbano, se evidencia una voluntad de transformación y de orgullo, resumida en una frase que reinventa el conocido poema de Vicente Gerbasi: “Venimos de la noche, pero no vamos hacia ella, vamos hacia el aire, vamos hacia la luz estruendosa del sol”.

Una tradición compartida

DÍA MUNDIAL DE LA AREPA 2026

Marianella Montenegro

Desde hace catorce años, cada segundo sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa, una iniciativa impulsada por Venmundo (Venezolanos en el Mundo) que, con el paso del tiempo, ha ido ganando fuerza y entusiasmo alrededor del planeta.

Y es que gracias a la diáspora venezolana y a su intensa presencia en las redes sociales, la arepa se ha convertido en protagonista de conversaciones, reuniones y *posts* colmados de elogios, nostalgias, sentido de pertenencia e identidad. En los últimos tiempos también ha sido centro de largas



y acaloradas discusiones —no exentas de humor— acerca de su origen. Por fortuna, la disputa ha ido perdiendo temperatura y hoy existe un amplio reconocimiento de que la arepa es un alimento de origen precolombino, arraigado históricamente en los territorios que hoy ocupan Venezuela y Colombia.

Este año, la celebración tuvo lugar el 12 de septiembre y convocó en numerosas ciudades del mundo arepazos, festivales, recorridos gastronómicos, competencias, talleres de cocina y promociones especiales en

areperas —los restaurantes especializados en su preparación y venta— y *food trucks*, conocidos popularmente en Venezuela como “carritos”.

En Caracas se celebró el Arepa Fest, durante todo el fin de semana, en la terraza del centro comercial Parque Cerro Verde, bajo el lema ‘La arepa nos une’. En Madrid, la Ruta de la Arepa reunió a más de cuarenta restaurantes, mientras que en el emblemático Mercado de San Miguel se realizaron degustaciones y clases magistrales de cocina para aprender a amasar y rellenar arepas. Y en Miami, pese a las dificultades que atraviesa la comunidad migrante venezolana en zonas como Doral, varios establecimientos se sumaron a la celebración con combos y promociones especiales —entre ellas, arepas a un dólar—, agrupadas bajo el eslogan ‘Arepazo Mundial 2026’.

En Colombia, la fecha ha comenzado también a hacerse un lugar en los calendarios de celebraciones culturales. Según la Academia Colombiana de Gastronomía, existen 75 variedades oficiales de arepa, aunque distintas investigaciones culinarias documentan más de doscientas variantes regionales y registran

hasta 600 preparaciones a lo largo del país.

Están, entre muchas otras, la arepa boyacense, reconocible por su toque dulce, su textura gruesa y su relleno de cuajada; la arepa de huevo, emblema de la costa Caribe, una arepa frita que guarda en su interior un huevo entero; la arepa paisa, delgada, sin sal ni relleno, compañera discreta de prácticamente cualquier comida; la arepa santandereana, elaborada con maíz pelado en agua de ceniza y chicharrón molido incorporado a la masa; y la arepa ocañera, pequeña, delgada y de sabor suave, tradicional de Norte de Santander.

Esta tradición compartida tiene, sin embargo, sus propios matices a cada lado de la frontera. Mientras en Colombia es común encontrar la arepa como acompañante de las comidas, en Venezuela se ha convertido en plato principal y, gracias a la variedad de sus rellenos, en una suerte de exitoso *fast food* de proyección internacional.

La reina pepiada, con pechuga de gallina, aguacate y mayonesa; la dominó, con caraoatas negras y queso blanco; la pelúa, con queso amarillo rallado; las de queso llanero o telita, son apenas algunas de las combinaciones más conocidas. A ellas se suman otras, fruto de la imaginación y de la abundancia de cada región: perrito con queso guayanés, carne mechada con aguacate o pepitonas con chipichipi, como las que pueden encontrarse en los mercados de la isla de Margarita.

La arepa, en definitiva, es mucho más que una preparación a base de harina de maíz. Es una tradición que viaja y que, lejos de dividir, encuentra en su propia diversidad una forma de unir.

El Día Mundial de la Arepa ya es una celebración global: actualmente se conmemora en más de treinta países y alrededor de 350 ciudades. Para los venezolanos, dentro y fuera del territorio, la arepa puede estar presente en el desayuno, el almuerzo o la cena; puede cambiar de relleno, de tamaño o de acento, pero conserva algo esencial. En las actuales circunstancias, una arepa es también un pedacito de país: el recuerdo de una mesa, de una costumbre, de una familia y de un sabor que llevan consigo a dondequiera que vayan.



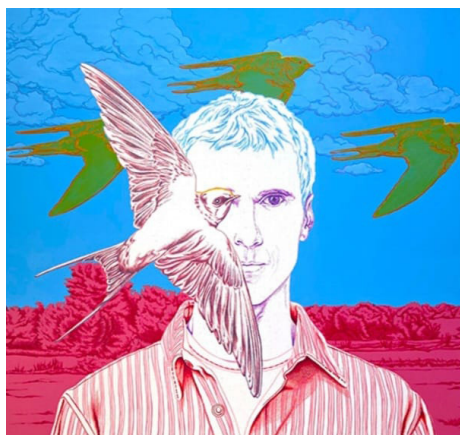
En North Miami Beach

Cartografías de pertenencia, migración y visibilidad

Mundo Arte Gallery presenta *At Least for a Moment*, una exposición individual del artista venezolano Rómulo Martínez, nacido en Maracaibo y radicado en Estados Unidos. Curada por Marco Caridad, la muestra estará abierta del 3 al 24 de octubre de 2026 y reúne una propuesta de trabajo en torno a migración, identidad, memoria, visibilidad y pertenencia. Martínez desarrolla una práctica de medios mixtos que integra dibujo, pintura, artes gráficas, collage, ensamblaje e instalación. En las obras de esta exposición aparecen figuras masculinas, aves migratorias, plumas, manos, pies, objetos cotidianos y fuentes de luz dentro de paisajes urbanos y naturales minimalistas, deliberadamente desprovistos de referencias geográficas concluyentes.

Las garzas, golondrinas y otras aves en tránsito adquieren un papel central. Su migración, cíclica y ligada a la orientación y la supervivencia, cuestiona la asociación automática entre vuelo y libertad: a veces, moverse es simplemente una estrategia para continuar existiendo.

Para el curador Marco Caridad, la exposición explora también los sistemas de visibilidad



mediante los cuales un cuerpo se vuelve reconocible en un determinado contexto social. Migrar implica entrar en otro sistema de lectura, donde el acento, los gestos, la memoria y las referencias culturales pueden adquirir nuevos significados: “hay territorios que habitamos como si fuesen nuestros y que, sin embargo, nunca dejan de sentirse provisionales”.

At Least for a Moment no pretende resolver la experiencia migratoria, sino habitar su contradicción: ¿cómo se reconoce una persona cuando cambia el sistema que la reconoce? Entre desplazamiento y arraigo, la muestra propone un espacio de tránsito en el que llegar, orientarse y volverse visible pueden ser formas, aunque sea por un momento, de pertenecer.

Fuente: www.thewynwoodtimes.com

Ávila/Monserrate
COMPROMISO DEMOCRÁTICO

ESTIMADOS LECTORES,

En Ávila Monserrate necesitamos de su apoyo para continuar ofreciendo, a través de nuestro boletín mensual, información y opinión valiosa a la comunidad venezolana en Colombia y otros países. Somos una Asociación colombo-venezolana, sin ánimo de lucro, constituida para exaltar los valores democráticos, promover la vigencia de los derechos humanos e incentivar la comprensión del fenómeno migratorio venezolano en el mundo y especialmente en Colombia.

Durante años hemos mantenido esta publicación — que ya arribó a su número 152 — como plataforma para difundir y dar a conocer información sobre estos temas que tanto interesan a la población venezolana fuera y dentro del país.

Pero en este momento, debido a los recortes de la ayuda internacional, carecemos de los recursos necesarios para continuar sufragando los costos de producción.

Por esta razón, acudimos a su solidaridad que se puede expresar en un apoyo económico, dentro de las posibilidades de cada quien. Cualquier monto, por modesto que sea, vale mucho. Si es de su interés apoyarnos, para obtener mayor información, puede escribirnos a nuestro correo electrónico: grupoavilamonserrate@gmail.com

Con su confianza y colaboración podremos seguir produciendo nuestro boletín. Agradecidos.

Tulio Hernández
Presidente-Asociación Ávila Monserrate

Integración colombo-venezolana

Encuentro Empresarial Binacional en Cúcuta

Con motivo del IV aniversario de la reapertura de la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira, los días 14 y 15 de octubre se realizará el Encuentro Empresarial Binacional en el Hotel Casino de Cúcuta. La iniciativa busca evaluar los avances alcanzados en materia de integración económica, social e institucional entre ambas naciones, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional y las relaciones fronterizas, al tiempo de promover el diálogo empresarial, el turismo y las inversiones conjuntas.

Las jornadas contarán con una agenda académica que reunirá a especialistas de distintos sectores en torno a temas de interés para el desarrollo regional. Entre las



conferencias destacan “Perspectivas económicas y comerciales del mercado binacional”, que ofrecerá una lectura actualizada de la evolución del comercio entre Colombia y Venezuela, con especial atención en los sectores que presentan mayores posibilidades de crecimiento, así

como en los riesgos del mercado; y “Turismo binacional como motor de desarrollo económico”, que analizará el papel del turismo como dinamizador del comercio y los servicios, y los desafíos relacionados con la conectividad y la movilidad fronteriza. Por otra parte, el sector energético tendrá un espacio destacado con la conferencia “Energía, hidrocarburos y oportunidades de inversión regional”. En ella se examinará el panorama actual del sector en ambos países, las posibilidades de cooperación binacional y los retos y perspectivas de los hidrocarburos. El encuentro concluirá con el panel “Construyendo una frontera competitiva”, concebido como un espacio de diálogo entre los sectores público y privado y la academia. La discusión estará centrada en la articulación de esfuerzos para impulsar la infraestructura, la innovación y el desarrollo productivo, elementos fundamentales para consolidar una frontera más integrada, dinámica y competitiva.

Fuente: www.comvenezuela.com/eventos/